



COMITÉ PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

ACTA RELATIVA A LA SESIÓN CT/SE/48/2021

En Mexicali, Baja California, siendo las nueve horas del día primero de septiembre de dos mil veintiuno, se reunieron en la sala de sesiones del Consejo de la Judicatura del Estado, los integrantes del Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, el Magistrado Nelson Alonso Kim Salas, el Consejero de la Judicatura, Lic. Francisco Javier Mercado Flores, la Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura, C.P. Rosaura Zamora Robles, el Encargado de Despacho de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna del Poder Judicial, Lic. Santiago Romero Osorio y la Directora de la Unidad de Transparencia, Maestra en Derecho Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Secretaria Técnica del Comité, para celebrar la sesión extraordinaria CT/SE/48/2021.

La Secretaria Técnica del Comité da cuenta con la lista de asistencia de todos los integrantes del Comité, al Magistrado Presidente, quien declara la existencia de quórum legal, por lo cual se inicia esta sesión conforme a los artículos 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 39 y 42 del Reglamento de la Ley citada. Acto continuo, sometió a sus integrantes el orden del día en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

- I. Aprobación del orden del día
Por unanimidad se aprobó en sus términos.
- II. Asuntos a tratar:

ÚNICO. Procedimiento de clasificación de la información solicitada como confidencial 24/2021, derivado de la respuesta otorgada por la Directora de la Unidad de Transparencia, a la solicitud de acceso a la información 00834421, realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

Visto el proyecto de resolución presentado por la Secretaria Técnica, se puso a discusión el asunto y con las facultades que se le confieren al Comité, en las fracciones I y II del artículo 54, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Baja California; 8 y 11 fracción XIII, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California, se determina aprobarlo por sus propios y legales fundamentos y como consecuencia, **habrá de confirmarse la clasificación de la información solicitada como confidencial**, tomando en cuenta los antecedentes y consideraciones siguientes:

1) Antecedentes:

1.1) Mediante el registro del folio 00834421, en la Plataforma Nacional de Transparencia, el peticionario solicitó se le informe si el Poder Judicial del Estado de Baja California a través de alguno de sus juzgados ha iniciado el trámite de la sucesión a bienes del finado [REDACTED], y, en su caso, se le informe el tribunal ante el cual se radicó y el número de expediente. Manifiesta que es con la finalidad de no duplicar el trámite de juicio sucesorio y estar en posibilidades de saber y conocer quién es el representante legal de la sucesión.

1.2) Por oficio número 1320/UT/MXL/2021, del veintisiete de agosto próximo pasado, la Titular de la Unidad de Transparencia respondió al solicitante, lo siguiente:

*“Por este conducto y con relación a su solicitud registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 00834421, en fecha 18 de agosto del año en curso, me permito informarle que **no es posible atender su petición, toda vez que lo solicitado no se encuentra dentro del marco de la Ley, por tratarse de información confidencial relativa a datos de carácter personal o de la esfera privada de particulares**, consistente en conocer de una sucesión a bienes de un fallecido y por consiguiente afecta también a la vida privada y patrimonio de sus herederos.*

Lo anterior se fundamenta de la manera siguiente:

Artículo 4 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, dispone que se entiende por datos personales, cualquier

información concerniente a una persona física identificada o identificable, disposición que se amplía en el artículo 172 del Reglamento de la Ley de la materia que a la letra dice: "...Artículo 172. Se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable, tales como el nombre, (...) patrimonio, (...)", entre otros, por lo que se requeriría del consentimiento de su titular, para comunicarlos a terceros.

En este caso, el nombre del albacea y el número de expediente son datos que relacionan e identifican, no solo al autor de la herencia, sino a las personas o partes legítimamente interesadas en dicho proceso judicial, que a juicio de esta autoridad, deben ser protegidos de terceros no autorizados.

(...) Vistas así las cosas, no se trata de conocer sobre la actividad propia de este sujeto obligado en su función de impartir justicia, sino conocer si una persona determinada es parte, en este caso a través de quienes tienen interés legítimo en los juicios ventilados ante los tribunales del Poder Judicial, motivo por el cual, esta autoridad debe proteger y tutelar ese espacio de la vida privada de los particulares y no está obligada a realizar una búsqueda requerida por un tercero extraño a los intereses legítimos de las partes en un juicio o tercero no autorizado;

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado de Baja California que reza: "la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna, y solo podrá tener acceso a ella, los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello" y en el 184 del ordenamiento citado, que dispone: "Es obligación de los servidores públicos, buscar y proporcionar la información pública, que no se encuentre reservada o sea confidencial".

En consecuencia la información solicitada es clasificada como confidencial y su acceso debe ser restringido a sus titulares sus representantes y en su caso, a los servidores públicos facultados para ello (...)"

2) Del acto de clasificación de la información solicitada:

Hecho el análisis del caso concreto, le asiste la razón a la Titular de la Unidad de Transparencia, pues conforme al artículo 172 del Reglamento de la Ley de la materia se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la **información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable así como lo relativo al patrimonio de una persona – en este asunto, la masa hereditaria – así como el número del expediente** pues es un dato personal que se relaciona e identifica a las personas o partes legítimamente interesadas en un proceso judicial, que a juicio de esta autoridad, debe ser protegido de terceros no autorizados, máxime que existen medios legales establecidos en la Ley procesal civil del estado para obtener la información que manifiesta el solicitante “... conocer quién es el representante legal de la sucesión (albacea) ...”, pues cualquier persona con algún derecho sobre una herencia, puede hacer la denuncia correspondiente ante el juez competente, quien en su caso ordenará las notificaciones necesarias y decretará la acumulación de los expedientes. En efecto, el juicio sucesorio es atrayente de todos aquellos que se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 764 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California y en todo caso, el órgano jurisdiccional notificará a los demás herederos que sean dados a conocer en la denuncia de la muerte de una persona para abrir el juicio correspondiente, sea testamentario o intestamentario, así se dispone en los artículos 775, 776, 784 y 787 de la ley procesal citada. Preceptos normativos que pueden ser consultados en el sitio <http://www.pjbc.gob.mx/LeyesYReglamentos.aspx>.

A mayor abundamiento, debemos recordar que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Constitución distingue dos tipos de información: aquella referida en la fracción I del apartado A del artículo 6to. Constitucional, que se denomina **información pública** y está referida a toda aquella que está en posesión de cualquier autoridad, entidades, órganos, organismos y de los Poderes del Estado e incluso a cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad y por otro lado, está la **información que se refiere a la vida privada y los datos personales**.

En la primera categoría está incluido todo aquel documento que dé cuenta de las actividades desarrolladas por los entes del estado en ejercicio de sus funciones y que, entre otras cuestiones pueda transparentar la gestión pública, así como favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos puedan valorar el desempeño de las autoridades. Dicha información solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

En la segunda categoría se ubica la información de los particulares, que el estado posee derivado de la natural interacción entre gobernantes y gobernados; esto es, se trata de información relacionada a diversos fines -tributarios, administrativos, mercantiles, de relaciones familiares, entre otros- que el estado posee para el mejor desarrollo de sus atribuciones. Dicha información será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes.

En materia de transparencia y acceso a la información, toda actuación judicial que compone un expediente judicial es pública, por regla general y en todos los casos las actuaciones judiciales admiten ser divulgadas en versión pública, en las que se suprima la información confidencial o reservada de los datos personales que en ellas obren.

En el caso concreto no se trata de transparentar y dar acceso a actuaciones judiciales, sino que se divulgue información que pertenece a la esfera privada de una o varias personas físicas determinadas, pues lo que se pide es conocer si en el Poder Judicial a través de alguno de sus Juzgados ha iniciado el trámite de la sucesión a bienes de una persona fallecida y requiere conocer el número de expediente y órgano jurisdiccional en el que se encuentre radicado. Vistas así las cosas, se reitera, no se trata de conocer sobre la actividad propia de este sujeto obligado en su función de impartir justicia, sino conocer datos relacionados a una sucesión de bienes de persona determinada ante los tribunales del Poder Judicial del Estado de Baja California, motivo por el cual, esta autoridad debe proteger y tutelar ese espacio de la vida privada de los particulares y no está obligada a realizar una búsqueda requerida por un tercero extraño a los intereses legítimos de las partes en un juicio jurisdiccional; esto es, un tercero no autorizado. Lo anterior tiene su

fundamento en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California que reza: ***“la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna, y solo podrá tener acceso a ella, los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello”*** y en el 184 del ordenamiento citado, que dispone: ***“Es obligación de los servidores públicos, buscar y proporcionar la información pública, que no se encuentre reservada o sea confidencial”***.

Para el acto de clasificación, cabe destacar que si bien es cierto que de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, **toda información** generada, administrada, adquirida, transformada o en posesión de Poder Judicial, por virtud del ejercicio de sus competencias, funciones y atribuciones, es **pública**, también lo es que ésta puede ser **negada a terceros**, mediante un acto debidamente fundado y motivado que la clasifique como **confidencial** y por ende, restringida al público.

Por otro lado, considerando que en el caso concreto, el acto de clasificación se hace con motivo de la recepción de una solicitud de acceso a la información, se exige además de la exposición de **los motivos que la justifiquen, aplicar la prueba de daño**, lo que implica en este caso, precisar la normatividad que expresamente le otorga el carácter de confidencial a la información solicitada y por otra, **determinar si con su difusión se causaría un serio perjuicio al interés o intereses públicos tutelados; es decir, la existencia de una expectativa razonable de daño presente, probable o específico**, a lo que la doctrina ha denominado la prueba de daño.

Para efectos de lo anterior, en el caso concreto, para el acto de clasificación de la información solicitada como confidencial, encontramos como normatividad aplicable la siguiente: Artículos 4, fracciones VI, y XII, 106, 107, 109 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 4 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California; 171, 172, 175, 176, 177 y relativos del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.

De dicha normatividad se desprende, sin necesidad de interpretación, que la clasificación es un proceso mediante el cual el sujeto obligado determina si la información en su poder, encuadra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.

Para dicha determinación, es necesario conocer la naturaleza de la información requerida, en el caso que nos ocupa, se solicita que se indique si en el Poder Judicial existe registrado un juicio en el que sea parte una persona determinada, el número del mismo y el órgano de radicación, que como ya quedó asentado, se trata de un dato de carácter personal, atendiendo lo establecido en el artículo 172 del Reglamento de la Ley de la materia que considera entre los datos personales, la información numérica, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable y el patrimonio de esa persona; en este caso, el número del expediente es el dato personal que se relaciona e identifica a las personas o partes legítimamente interesadas en un proceso judicial, que a juicio de esta autoridad, debe ser protegido de terceros no autorizados, sobre todo como ya quedó asentado se trata de un asunto donde se ventila el patrimonio dejado por una persona fallecida a sus legítimos herederos o legatarios en su caso.

Para reforzar la afirmación anterior, cabe citar el documento publicado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información titulado “Metodología de Análisis de Riesgo BAA”, que en su página 3, se reflexiona sobre la necesidad de realizar una clasificación de los datos personales en función de tales variables que se presentan dentro de un análisis de riesgo y clasifica a los datos personales en 4 categorías de acuerdo con la criticidad de los mismos y dentro de los datos de riesgo inherente medio, contempla entre otros los datos que permiten inferir el patrimonio de una persona, datos de autenticación y los datos jurídicos, tales como: antecedentes penales, amparos, demandas, contratos, litigios y cualquier tipo de información relativa a una persona que se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo llevado en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal o administrativa, información que sin duda, pertenece a la esfera jurídica privada de los particulares y, para que pueda ser comunicada a terceros, requiere del consentimiento de sus titulares, según se dispone en el artículo 176 del

Reglamento de la Ley local de la materia, lo cual se justifica atendiendo la obligación legalmente establecida de proteger y resguardar la información confidencial o aquella clasificada como reservada, dispuesta por la Ley estatal de la materia, en el artículo 16, fracción VI, considerando que es innegable, que la divulgación de estos datos representa un perjuicio real y significativo para sus titulares y del interés público de tutelar la vida privada y la intimidad de los particulares, ya que se trata de información que no es de interés general, sino que se comprende dentro de los denominados datos personales que de acuerdo a la fracción VIII del artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, información de carácter confidencial, acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, la que en su artículo 4, fracción XII, establece que se entenderá por información confidencial: ***“La información en posesión de los sujetos obligados que refiera a datos personales; (...) por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos que así lo contemple la Ley General o la presente Ley”, lo que se complementa con lo dispuesto en el precepto normativo 172, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que a la letra reza: “Se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable, tales como el nombre, (...) patrimonio (...).”***

Es importante reiterar en este apartado lo establecido en el diverso numeral 171 del Reglamento referido, de lo cual se desprende con meridiana claridad que los terceros no podrán tener acceso a la misma, salvo que cuenten con el consentimiento de sus titulares, como ya quedo señalado, lo que en el caso no sucede.

3) **De la prueba de daño.** Atendiendo a los diversos numerales 175 y 177 del Reglamento de la Ley estatal de la materia, considerando que la clasificación se hace con motivo de la recepción de una solicitud de acceso a la información pública del Poder Judicial del

Estado, se procede a la exposición de los motivos que la justifiquen, mediante la aplicación de la prueba de daño, de conformidad con lo dispuesto en la ya citada Ley estatal, el Reglamento de la Ley local de Transparencia, los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y demás disposiciones aplicables.

En primer lugar, resulta pertinente citar el artículo Segundo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que indica que **se entenderá por “Prueba de daño: la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla”**.

Así las cosas y, dada la obligación de demostrar de manera fundada y motivada, que la divulgación de información lesiona un bien jurídico tutelado por tratarse de información concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable y que el daño que puede producirse con su publicidad, es mayor que el interés de conocerla, **al tratarse de datos personales de carácter confidencial protegidos por la Ley y que no se cuenta con la autorización de los titulares de los mismos, para su entrega o divulgación, la información de interés del peticionario debe clasificarse como confidencial y restringir su acceso.**

Efectivamente, con la aplicación de la prueba de daño, como sujeto obligado se debe justificar conforme al artículo 109 de la Ley de transparencia estatal, que: I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o de la seguridad nacional. A este respecto cabe decir que **liberar la información relacionada a los juicios en los que una persona determinada es parte, identificando el número de expediente de una sucesión a bienes**

de una persona determinada fallecida, que se lleva a cabo en este Poder Judicial, representa un riesgo real de injerencia de toda índole en sus vidas privadas, no autorizada, de ahí que no pueda liberarse la información, privilegiando el derecho a la privacidad de los particulares; II. El riesgo o perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda. Del análisis del punto anterior, se advierte que el daño que se pudiese causar a los particulares (herederos y/o legatarios) al divulgar sus datos personales de carácter jurídico, supera el interés público de que se conozcan, ya que no se puede suponer ningún interés público de liberarse, por lo que la clasificación de confidencialidad debe persistir, pues se reitera, que no se cuenta con el consentimiento necesario de su titular para la liberación de sus datos; III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. La negativa o limitación al derecho de acceso a la información es proporcional a la protección de la privacidad e intimidad de los particulares y es el único medio para evitar el perjuicio, pues frente al marco constitucional vigente, en términos del artículo 1^{ro} de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad debe dar igual tratamiento en la protección de los derechos fundamentales, tanto del solicitante de la información como de los sujetos de quienes se deben proteger sus datos personales.

4) **De la aprobación del acto de clasificación.** En virtud de lo fundado y motivado en los apartados anteriores, los integrantes del Comité, por unanimidad **ACUERDAN: Aprobar la clasificación de los datos personales requeridos, como confidenciales, consistentes en la información de los datos de carácter jurídico de los particulares que intervienen en procesos y procedimientos judiciales.**

Notifíquese y entréguese copia de esta acta al peticionario por conducto de la Unidad de Transparencia. Estando presente la Titular de la Unidad de Transparencia, se da por notificada de esta resolución.

Sin otro asunto que tratar, se cierra esta sesión, siendo las nueve horas con treinta minutos del día primero de septiembre de 2021.



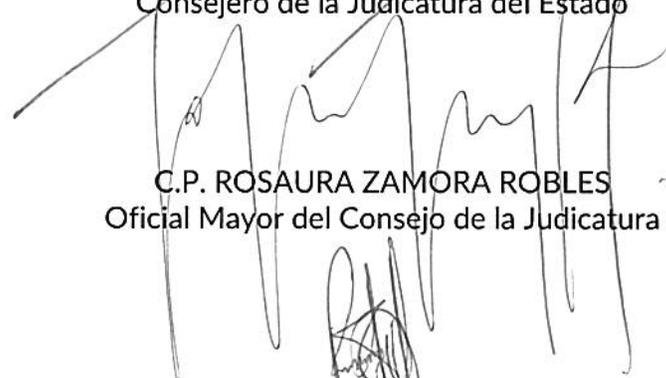
MAGISTRADO ALEJANDRO ISAAC FRAGOZO LÓPEZ
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado



MAGISTRADO NELSON ALONSO KIM SALAS
Adscrito a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia



LIC. FRANCISCO JAVIER MERCADO FLORES
Consejero de la Judicatura del Estado



C.P. ROSAURA ZAMORA ROBLES
Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura



LIC. SANTIAGO ROMERO OSORIO
Encargado de Despacho de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna

M.D. ELSA AMALIA KULJACHA LERMA
Secretaria Técnica del Comité

Firma electrónica con fundamento en los artículos 1 fracciones I y II, 2, 3 fracciones I, II, XIX, XX, XXV y
XXX, 4 fracciones I y II, 12 y 13, del Reglamento para el Uso del Expediente Electrónico y la Firma
Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja California



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de Baja California
Hoja de Evidencias Criptográficas

Archivo Firmado: F33_0932226.pdf
Proceso de Firma: 2850429

Autoridad Certificadora: AC del Poder Judicial del Estado de Baja California

Nombre:	ELSA AMALIA KULJACHA LERMA	Serie:	0000000000000007260
Fecha y Hora:	2021-09-02T09:34:32-07:00	Secuencia:	8221966
7e 9b 0c 2e 44 86 f8 d0 c7 7c ee 56 3c 85 34 10 27 dc 1a 0d 32 6f 4c d3 ad 83 73 7b 26 da f3 54 40 98 43 49 bc 57 fc 02 38 9f 32 12 5c 46 7c c1 69 e7 db 5f 75 95 07 43 2e b6 5f 40 a9 fc 0f be 40 ab c2 db ee f8 84 73 6f 49 45 5b 1c 4c ab 8e 50 54 ff ea 49 dd 1e 34 f2 6f e4 c0 68 2f a4 38 dc 19 01 62 30 97 b2 4e b1 eb 48 8b 69 b0 d8 b1 99 fe 9a 53 c0 ac 98 d0 67 1b a1 91 02 f0 84 03 2c 7f 1f 49 dc fd e6 d2 94 6f 60 c4 ed 42 3c be 9e 79 58 23 65 a7 d9 c6 c0 37 96 fa 0f 41 38 6f 40 29 6a f0 8d c3 59 4c 74 70 6f 4c 82 07 b2 16 a3 9f 4a e7 6d 28 23 74 04 2b 9a 80 75 70 88 49 b4 c0 fc 54 d1 da 87 12 11 f0 21 df d2 fb a4 17 c9 bb 3c e2 81 98 f9 08 c4 a2 02 9a e4 24 3b 8a e0 28 87 a1 17 dc 50 9e a0 78 bf 8f d9 be 42 55 35 df 93 80 07 24 d9 8a aa d1 9c 4d 58 c4 86 1d			
Datos estampillados:	C0405EF4A148175814F0A9F9EDD7EC4F0E8BC8722347DA3012B21D2965821A72		



FIRMADO POR:
- ELSA AMALIA KULJACHA LERMA
PROCESO DE FIRMA: 2850429

La validez de este documento puede ser verificada en la siguiente página

<https://tribunalelectronico.pjbc.gob.mx/Firma/validacion>

C0405EF4A148175814F0A9F9EDD7EC4F0E8BC8722347DA3012B21D2965821A72